



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	11001-33-35-026-2021-00102-00
PROCESO:	DEMANDA ORDINARIA LABORAL
DEMANDANTE:	YOMAR RODRIGUEZ
DEMANDADO:	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES- FONCEP

En el presente asunto, **YOMAR RODRIGUEZ**, promovió demanda laboral en contra de **FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES-FONCEP**, con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente, siendo conocido el asunto en un primer lugar por el Juzgado Veintiséis (26) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el cual en audiencia del 23 de marzo de 2021, celebrada dentro del proceso 11001310502620170021200, declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia, ordenando remitir el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, correspondiéndole por reparto el conocimiento del proceso a este Despacho.

Ahora bien, arribado el expediente a este Despacho judicial por reparto, y luego de examinada la demanda junto con las pruebas y respuestas a requerimientos allegados, se observa que los Juzgados Administrativos carecemos de jurisdicción para conocer del presente asunto, razón por la cual es procedente **susitar conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado Veintiséis (26) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá y este Despacho**, pues en consideración de este estrado judicial, el Juzgado en mención es el competente para desatar las pretensiones planteadas por el demandante.

Acorde con ello, este Despacho considera que no es posible avocar el conocimiento de la demanda radicada, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

El artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, **que no provengan de un contrato de trabajo**, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” (Negrita del Despacho).

Así mismo, el artículo 104 del C.P.A.C.A., indica cuales son los procesos que conoce la Jurisdicción Contencioso Administrativa, señalando para el efecto lo siguiente:

“ART. 104.- De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

(...)

Negrilla del Despacho

Por otra parte, los numerales 1º y 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2011, que modifica el Código de Procedimiento Laboral, establece que:

ARTICULO 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

(...)

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(...)”

Negrilla del Despacho.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que las controversias referentes al sistema de seguridad social integral, que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, **cualquiera sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, correspondería a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y Seguridad Social.**

Aunado a lo anterior, el máximo órgano de lo contencioso administrativo, determinó que los conflictos originados de las relaciones laborales y con la seguridad social,

la competencia se define por combinación de la materia objeto de conflicto y el vínculo laboral, **sin que la forma de reconocimiento o negativa del derecho sea determinante; correspondiendo a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, dilucidar las controversias relativas a la seguridad social de, entre otros sujetos, los trabajadores oficiales.**¹

Así las cosas, descendiendo al caso concreto, se reitera que la demandante pretende el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes en ocasión al fallecimiento de quien fue su compañero permanente.

En este sentido, con el objeto de determinar la competencia del Despacho dentro del presente asunto, se dispuso revisar detenidamente el expediente y a través de auto del 8 de junio de 2021, se ordenó oficiar a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E- Unidad de Servicios de Salud San Blas, para que arribaran al Despacho: **“Certificación en donde se indique, la clase de vinculación laboral que ostentaban los Auxiliar Servicios Generales IIC (Celador) Código 605025 Grupo de Suministros, Servicios Generales y Mantenimiento Departamento Administrativo Subdirección Hospital San Blas Primer Nivel de Atención 114, que prestaban sus servicios en el Hospital de San Blas y en el cual laboró el señor BENEDICTO HERRERA MONTERO, (q.e.p.d.), quien se identificada con cedula de ciudadanía No. 2.852.087 de Bogotá. Certificación en la que se deberá señalar de manera precisa si los mismos ostentan la calidad de trabajadores oficiales o empleados públicos.”**

Pues bien, el director operativo de talento humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., a través de oficio del 21 de junio de 2021, dio respuesta al requerimiento realizado por este Despacho informando lo siguiente:

*“Revisada la hoja de vida del señor BENEDICTO HERRERA MONTERO (q.e.p.d.), quien se identifica con cedula de ciudadanía No. 2.852.087 se puede observar que el señor ostentaba el cargo de Auxiliar Servicios Generales IIC (Celador) Código 605025 Grupo de Suministros, Servicios Generales y Mantenimiento Departamento Administrativo Subdirección Hospital San Blas Primer Nivel de Atención **con tipo de vinculación trabajador oficial.**”*

Negrilla fuera de texto

Así las cosas, **es claro que el causante de la prestación solicitada, señor BENEDICTO HERRERA MONTERO, (q.e.p.d.), no se encontraba vinculado con la administración a través de una relación legal y reglamentaria,** dado que de conformidad con la precitada certificación, fungió como trabajador oficial, a través de un contrato de trabajo, en el cargo de “Auxiliar Servicios Generales IIC (Celador) Código 605025 Grupo de Suministros, Servicios Generales y Mantenimiento Departamento Administrativo Subdirección Hospital San Blas Primer Nivel de Atención”.

En este orden de ideas, esta jurisdicción no es competente para conocer del

¹ C.E., S.2ª, proveído de marzo 28/2019, exp. 11001-03-25-000-2017-00910-00 (4857), M.P. William Hernández Gómez.

presente asunto, pues en estos eventos la jurisdicción que tiene asignado el conocimiento de estos es la ordinaria laboral, pues así lo dispone la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 155 numeral 2º y 104 en su numeral 4, y la Ley 712 de 2011, en su artículo 2º.

Por lo anterior, este Despacho considera que no le asiste razón al Juzgado Veintiséis (26) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, al indicar en proveído 23 de marzo de 2021, que no era el competente para conocer del asunto, puesto que no corroboró el tipo de relación o vinculación para con la entidad que ostentó en su momento el causante de la obligación. Disponiendo para el efecto únicamente lo siguiente, tal como quedó registrado en el acta de audiencia realizada el 23 de marzo de 2021:

“Teniendo en cuenta que las excepciones propuestas por la parte demandada. Considera el despacho que le asiste razón a dicha entidad y por tanto la jurisdicción competente que deberá conocer del presente asunto es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Razón por la cual el despacho declara probada la excepción denominada falta de jurisdicción y competencia por tal motivo se remitirá las diligencias a la oficina de repartos de los juzgados administrativos de Bogotá para que allí sea repartido el proceso y sea conocido por un juez administrativo. En Caso de que los jueces administrativos señalen que no son competentes para decidir el presente asunto, el despacho desde ya presenta el conflicto negativo de competencias. (...)”

Tal como se observa, esta providencia omitió estudiar en conjunto y concordancia, los artículos 155 y 104 numeral 4º de la Ley 1437 de 2011, los cuales son claros en establecer la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente a las controversias suscitadas entre empleados con vinculación legal y reglamentaria y entidades del Estado, dejando por fuera del ámbito de competencia, precisamente los asuntos en los cuales están involucrados empresas privadas.

Al respecto, el Consejo Superior de Judicatura, con auto de 5 de octubre de 2016, M.P. Magda Victoria Acosta Walteros, dentro del expediente 2016-01461, la Corporación señaló:

*“Corolario de lo anterior, es necesario señalar que **si no se está frente a una relación legal y reglamentaria, no le compete a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el conocimiento del asunto en referencia y su conocimiento corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria**, tal como ha sido el precedente de esta Sala:*

*“para la Sala, estudiadas y analizadas las pretensiones, hechos y pruebas de la demanda sub-examine, no cabe duda que en el caso en particular, corresponde la misma a una demanda de carácter laboral para que se declare la existencia de un contrato de trabajo y se cancelen varias acreencias laborales con la respectiva indexación. Y en aras a resolver, surge la necesidad de establecer si el actor de dicha demanda es trabajador oficial o empleado público. Cotejados los hechos, pretensiones y pruebas de la demanda para poder dirimir el conflicto de competencia, es del caso señalar que el demandante **no tiene la calidad de empleado público**.*

[...]

De allí que [...] se concluye que el presente caso se trata de un conflicto netamente derivado de un contrato de trabajo, en el cual el demandante pretende que se declare que entre él y el **DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA** existió una relación laboral bajo la modalidad de contrato de trabajo a término fijo o indefinido, según las afirmaciones realizadas por el demandante en su libelo demandatorio y que como consecuencia de ello, se condene a la entidad antes nombrada demandada, al pago de las prestaciones sociales legales, factores salariales convencionales y prestaciones sociales convencionales no reconocidas al actor; consecuencia de lo anterior queda claro que la competencia para conocer del conflicto de jurisdicción aquí analizado, debe adscribirse a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, representada en este caso por el Juzgado segundo Laboral del Circuito de Riohacha".

Es de tener en cuenta, que el actor también pretende se le paguen las prestaciones sociales y todos los demás emolumentos fruto de la relación laboral, que alega haber tenido, la cual como ya se dejó claramente expuesto **no existe prueba alguna que indique la existencia de una relación legal y reglamentaria como empleado público, y por tanto se activa la cláusula general de competencia de la jurisdicción laboral ordinaria señalada el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social;** aunado a lo anterior, se vislumbra en el plenario a folio 91 del plenario, que **la naturaleza del cargo de conductor que ostentaba el demandante, es catalogada como de trabajador oficial**, de conformidad con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los diferentes empleos de la planta de personal del Hospital San Cristóbal I Nivel ESE de Bogotá, **situación esta que hace entrever que la Jurisdicción para conocer el presente asunto es la Ordinaria en su especialidad Laboral y de Seguridad Social.**"

Así las cosas y dado lo explicado en precedencia, junto con el pronunciamiento realizado por el Consejo Superior de la Judicatura, y en consideración a la situación fáctica expuesta y los medios de prueba aportados, el Despacho declarará la falta de jurisdicción y promoverá el conflicto negativo de jurisdicciones con el Juzgado Veintiséis (26) Laboral del Circuito de Bogotá, pues se encuentra claramente establecido que el tipo de vinculación del causante de la prestación solicitada **BENEDICTO HERRERA MONTERO, (q.e.p.d.)**, fue de trabajador oficial, lo que sin lugar a dudas le asigna el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral y no como erradamente lo sostiene el mencionado Despacho a la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

En tales circunstancias, de conformidad con el artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política, este Despacho considera necesario remitir el presente expediente a la Corte Constitucional, con el objeto de proceda a dirimir el conflicto negativo aquí suscitado, dado que se presenta entre Juzgados de diferentes jurisdicciones, pues tanto el Juzgado Veintiséis (26) Laboral de Bogotá, como este Despacho, Juzgado Veintiséis (26) Administrativo de Oralidad de Bogotá, consideramos que no tenemos competencia para conocer del asunto, al tratarse de una controversia en la cual está involucrado un trabajador oficial.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE JURISDICCIÓN para conocer la demanda laboral promovida por **YOMAR RODRIGUEZ SALINAS** en contra de **FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES- FONCEP**.

SEGUNDO.- PROMOVER CONFLICTO DE JURISDICCIONES, entre este Despacho y el Juzgado Veintiséis (26) Laboral del Circuito de Bogotá, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO.- REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, a la **CORTE CONSTITUCIONAL**, con el objeto que proceda a dirimir el conflicto suscitado.

CUARTO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CA



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

7bc09ca4fa1d2cba0c9df6f7dd3be6e692bd8719b877603ec62949d2e4d3da7e

Documento generado en 13/07/2021 01:49:20 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>